

15 FEB. 1996

# GACETA OFICIAL

## DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

AÑO CXXIII MES V

Caracas, martes 13 de febrero de 1996

Número 35.900

### SUMARIO

#### Presidencia de la República

Decreto N° 1.052, mediante el cual se fija como salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores urbanos que presten sus servicios a un patrono privado, la cantidad mensual de veintidós mil veinte bolívares, esto es, setecientos treinta y cuatro bolívares diarios, la cual será pagada en dinero efectivo.

Decreto N° 1.053, mediante el cual se fija como salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores rurales que presten sus servicios a un patrono privado, la cantidad mensual de veinte mil diez bolívares, esto es, seiscientos sesenta y siete bolívares diarios, la cual será pagada en dinero efectivo.

Decreto N° 1.054, mediante el cual se modifica el subsidio a la alimentación y al transporte, contenido en el Decreto N° 247 del 29 de junio de 1994 publicado en la Gaceta Oficial N° 35.493 del 30 de junio de 1994, en los términos que en él se señalan.

Decreto N° 1.055, mediante el cual se modifica el subsidio a la alimentación y al transporte, contenido en el Decreto N° 247 del 29 de junio de 1994 publicado en la Gaceta Oficial N° 35.493 del 30 de junio de 1994, en los términos que en él se indican.

#### Junta de Administración Cambiaria

Reforma Parcial de la Resolución N° 32 de fecha 26 de septiembre de 1994.

Resolución por la cual se nombra a la doctora Estela Hidalgo, Director Coordinador de la Junta de Administración Cambiaria.

#### Ministerio de Relaciones Exteriores

Resolución por la cual se encarga de la Dirección General Sectorial de Política Internacional, al ciudadano Embajador Edmundo González Urrutia.

#### Ministerio de Hacienda

##### Superintendencia de Seguros

Resolución por la cual se revoca la autorización de Agente Exclusivo Definitivo otorgada a la ciudadana Evelin Fermin Cabrera.

#### Ministerio de la Defensa

Resolución por la cual se concede pensión de sobreviviente por vía de gracia a los ciudadanos que en ella se mencionan.

#### Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Resolución por la cual se designa al ciudadano David Ramón Padrón Rivas, como Director General Sectorial de Planificación y Presupuesto.

Resolución por la cual se designa como Presidente del VIII Congreso Venezolano de Salud Pública al doctor Carlos E. Castillo.

#### Ministerio de Agricultura y Cría

Resolución por la cual se encarga al ciudadano José Manuel González, de la Dirección General Sectorial de Mercadeo Agrícola.

Resolución por la cual se encarga al ciudadano Tulio Amaya, de la Dirección de Operación y Mantenimiento.

Resolución por la cual se dispone que el ordenamiento de pesquerías industriales de fondo se basa en el criterio de participación de los productores en el manejo del recurso pesquero, cuyos objetivos fundamentales son los que en ella se señalan.

Resolución por la cual se fija en todo el territorio nacional, el precio de la sardina a nivel de productor en los términos que en ella se especifican.

#### Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Resolución por la cual se designa para integrar la Junta Directiva de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), a la ciudadana Carmen Carrillo.

#### Ministerio del Desarrollo Urbano

Resolución por la cual se designa a partir del 01 de enero de 1996, al licenciado Cándido José Gómez Niño, como Director de Informática.

Resolución por la cual se designa desde el 05 de febrero de 1996, al ciudadano licenciado Francisco Cumana S., encargado de la Dirección de Finanzas.

Resolución por la cual se designa a partir del 01 de enero de 1996, a la ciudadana licenciada Yelet Amada Campos de Peraza, como Directora de Desarrollo Organizativo.

#### Consejo de la Judicatura

Resoluciones por las cuales se declaran las vacantes de los cargos que en ellas se señalan en el Juzgado y Defensoría que en ellas se indican.

#### Contraloría General de la República

Resolución por la cual se impone una multa.

Resoluciones por las cuales se confirman multas.

#### Consejo Supremo Electoral

Resolución por la cual el Consejo Supremo Electoral declara la reestructuración del Organismo.

### PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Decreto N° 1.052

07 de febrero de 1996

**RAFAEL CALDERA**  
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los ordinales 1° y 22° del artículo 190 de la Constitución, y el artículo 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, oída la opinión de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.), de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), de la Federación de Artesanos Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (FEDEINDUSTRIA) y del Banco Central de Venezuela, en Consejo de Ministros,

#### DECRETA

**Artículo 1°:** Se fija como salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores urbanos que presten sus servicios a un patrono privado, la cantidad mensual de VEINTIDOS MIL VEINTE BOLIVARES (Bs. 22.020,00), esto es SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES (Bs. 734,00) diarios, la cual será pagada en dinero efectivo.

Quedan excluidas de la cantidad mínima señalada las prestaciones en especies que reciban los trabajadores, tales como alimentación, vivienda, vestido y otras de similar naturaleza. El trabajador conservará su derecho a disfrutarlas sin modificaciones que las desmejoren.

**Artículo 2°:** Se mantendrán inalterables las condiciones de trabajo no modificadas por el presente Decreto, tales como duración de la jornada y régimen de descanso o de vacaciones, a menos que se convengan modificaciones que beneficien al trabajador.

**Artículo 3°:** No serán beneficiados del salario mínimo previsto en el presente Decreto los trabajadores Domésticos y los Conserjes.

**Artículo 4°:** Las infracciones a este Decreto serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 627 de la Ley Orgánica del Trabajo.

**Artículo 5°:** Sométase este Decreto a la consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su ratificación expresa o tácita por el órgano legislativo.

**Artículo 6°:** Se deroga el Decreto N° 123 del 13 de abril de 1994.

**Artículo 7°:** El Ministro del Trabajo queda encargado de la ejecución de este Decreto.

Dado en Caracas, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis. Año 185° de la Independencia y 136° de la Federación.

(L. S.)

RAFAEL CALDERA

**Refrendado:**

El Ministro de Relaciones Exteriores, RAMON ESCOVAR SALOM

El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,

MILOS ALCALAY MIRCOVICH

El Ministro de Hacienda, LUIS RAUL MATOS AZOCAR

El Ministro de la Defensa, MOISES OROZCO GRATEROL

El Ministro de Fomento, WERNER CORRALES LEAL

El Ministro de Educación, ANTONIO LUIS CARDENAS

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, PEDRO RINCON GUTIERREZ

El Ministro de Agricultura y Cría, RAUL ALEGRETT RUIZ

El Ministro del Trabajo, JUAN NEPOMUCENO GARRIDO MENDOZA

El Ministro de Transporte y Comunicaciones, CIRO ZAA ALVAREZ

El Ministro de Justicia, RUBEN CREIXEMS SAVIGNON

El Ministro de Energía y Minas, ERWIN JOSE ARRIETA VALERA

El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,

ROBERTO PEREZ LECUNA

El Encargado del Ministerio del Desarrollo Urbano,

FRANCISCO GONZALEZ

La Ministra de la Familia, MERCEDES PULIDO BRICEÑO

El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, ANDRES CALDERA PIETRI

El Ministro de Estado, POMPEYO MARQUEZ MILLAN

El Ministro de Estado, FERNANDO LUIS EGAÑA

El Ministro de Estado, HERMANN LUIS SORIANO VALERY

El Ministro de Estado, JOSE GUILLERMO ANDUEZA A.

La Ministra de Estado, MARIA DEL PILAR IRIBARREN DE ROMERO

El Ministro de Estado, EDGAR PAREDES PISANI

El Ministro de Estado, CARLOS WALTER VALECILLOS

Decreto N° 1.053

7 de febrero de 1996

RAFAEL CALDERA  
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los ordinales 1° y 22° del artículo 190 de la Constitución, y el artículo 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, oída la opinión de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.), de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), de la Federación de Artesanos Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (FEDEINDUSTRIA) y del Banco Central de Venezuela, en Consejo de Ministros.

**DECRETA**

**Artículo 1°:** Se fija como salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores rurales que presten sus servicios a un patrono privado, la cantidad mensual de VEINTE MIL DIEZ BOLIVARES (Bs. 20.010,00); esto es, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES (Bs. 667,00) diarios, la cual será pagada en dinero efectivo.

Quedan excluidas de la cantidad mínima señalada las prestaciones en especie que reciban los trabajadores, tales como alimentación, vivienda, vestido y otras de similar naturaleza. El trabajador conservará su derecho a disfrutarlas sin modificaciones que las desmejoren.

**Artículo 2°:** Se mantendrán inalterables las condiciones de trabajo no modificadas por el presente Decreto, tales como duración de la jornada y régimen de descanso o de vacaciones, a menos que se convengan modificaciones que beneficien al trabajador.

**Artículo 3°:** Las infracciones a este Decreto serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 627 de la Ley Orgánica del Trabajo.

**Artículo 4°:** Sométase este Decreto a la consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su ratificación expresa o tácita por el órgano legislativo.

**Artículo 5°:** Se deroga el Decreto N° 124 del 13 de abril de 1994.

**Artículo 6°:** El Ministro del Trabajo queda encargado de la ejecución del este Decreto.

Dado en Caracas, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis. Año 185° de la Independencia y 136° de la Federación.



(L. S.)

**RAFAEL CALDERA****Refrendado:**

El Ministro de Relaciones Interiores, RAMON ESCOVAR SALOM  
 El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,  
 MILOS ALCALAY MIRCOVICH  
 El Ministro de Hacienda, LUIS RAUL MATOS AZOCAR  
 El Ministro de la Defensa, MOISES OROZCO GRATEROL  
 El Ministro de Fomento, WERNER CORRALES LEAL  
 El Ministro de Educación, ANTONIO LUIS CARDENAS  
 El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, PEDRO RINCON GUTIERREZ  
 El Ministro de Agricultura y Cría, RAUL ALEGRETT RUIZ  
 El Ministro del Trabajo, JUAN NEPOMUCENO GARRIDO MENDOZA  
 El Ministro de Transporte y Comunicaciones, CIRO ZAA ALVAREZ  
 El Ministro de Justicia, RUBEN CREIXEMS SAVIGNON  
 El Ministro de Energía y Minas, ERWIN JOSE ARRIETA VALERA  
 El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,  
 ROBERTO PEREZ LECUNA  
 El Encargado del Ministerio del Desarrollo Urbano,  
 FRANCISCO GONZALEZ  
 La Ministra de la Familia, MERCEDES PULIDO BRICEÑO  
 El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, ANDRES CALDERA PIETRI  
 El Ministro de Estado, POMPEYO MARQUEZ MILLAN  
 El Ministro de Estado, FERNANDO LUIS EGAÑA  
 El Ministro de Estado, HERMANN LUIS SORIANO VALERY  
 El Ministro de Estado, JOSE GUILLERMO ANDUEZA A.  
 La Ministra de Estado, MARIA DEL PILAR IRIBARREN DE ROMERO  
 El Ministro de Estado, EDGAR PAREDES PISANI  
 El Ministro de Estado, CARLOS WALTER VALECILLOS

Decreto N° 1.054

07 de febrero de 1996

**RAFAEL CALDERA**  
**Presidente de la República**

En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 7° de Ley para el pago del Bono Compensatorio de Gastos de Transporte del 3 de agosto de 1988, publicada en la Gaceta Oficial N° 34.028 del 12 de agosto de 1988, y de conformidad con el artículo 133, literal b) de la Ley Orgánica del Trabajo, en Consejo de Ministros,

**DECRETA**

**Artículo 1°:** Se modifica el subsidio a la alimentación y al transporte, contenido en el Decreto N° 247 del 29 de junio de 1994 publicado en la Gaceta Oficial N° 35.493 del 30 de junio de 1994, en los términos siguientes:

Se establece como subsidio a la alimentación y al transporte seiscientos bolívares (Bs. 600,00), por jornada de trabajo laborada, para los trabajadores del sector privado nacional, que obtengan un ingreso mensual en dinero hasta setenta y cinco mil bolívares (Bs. 75.000,00). El pago del referido subsidio a la alimentación y al transporte se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 194 de la Ley Orgánica del Trabajo.

El derecho a percibir el subsidio previsto en el presente Decreto se extinguirá cuando el trabajador llegare a obtener un ingreso mensual en dinero de noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00).

**Artículo 2°:** Se mantienen en vigencia los artículos Segundo (2°), Cuarto (4°) y Séptimo (7°) del citado Decreto N° 247, que se modifica.

**Artículo 3°:** Se modifica el artículo tercero del citado Decreto en los términos siguientes:

No serán beneficiarios del subsidio previsto en el presente Decreto los trabajadores domésticos y los conserjes.

**Artículo 4°:** El presente Decreto se hará efectivo desde el primero de febrero del corriente año.

**Artículo 5°:** El Ministro del Trabajo queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis. Año 185° de la Independencia y 136° de la Federación.

(L. S.)

**RAFAEL CALDERA****Refrendado:**

El Ministro de Relaciones Interiores, RAMON ESCOVAR SALOM  
 El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,  
 MILOS ALCALAY MIRCOVICH  
 El Ministro de Hacienda, LUIS RAUL MATOS AZOCAR  
 El Ministro de la Defensa, MOISES OROZCO GRATEROL  
 El Ministro de Fomento, WERNER CORRALES LEAL  
 El Ministro de Educación, ANTONIO LUIS CARDENAS  
 El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, PEDRO RINCON GUTIERREZ  
 El Ministro de Agricultura y Cría, RAUL ALEGRETT RUIZ  
 El Ministro del Trabajo, JUAN NEPOMUCENO GARRIDO MENDOZA  
 El Ministro de Transporte y Comunicaciones, CIRO ZAA ALVAREZ  
 El Ministro de Justicia, RUBEN CREIXEMS SAVIGNON  
 El Ministro de Energía y Minas, ERWIN JOSE ARRIETA VALERA  
 El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,  
 ROBERTO PEREZ LECUNA  
 El Encargado del Ministerio del Desarrollo Urbano,  
 FRANCISCO GONZALEZ  
 La Ministra de la Familia, MERCEDES PULIDO BRICEÑO  
 El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, ANDRES CALDERA PIETRI  
 El Ministro de Estado, POMPEYO MARQUEZ MILLAN  
 El Ministro de Estado, FERNANDO LUIS EGAÑA  
 El Ministro de Estado, HERMANN LUIS SORIANO VALERY  
 El Ministro de Estado, JOSE GUILLERMO ANDUEZA A.  
 La Ministra de Estado, MARIA DEL PILAR IRIBARREN DE ROMERO  
 El Ministro de Estado, EDGAR PAREDES PISANI  
 El Ministro de Estado, CARLOS WALTER VALECILLOS

Decreto N° 1055

7 de febrero de 1996

**RAFAEL CALDERA**  
**Presidente de la República**

En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 7° de la Ley para el pago del Bono Compensatorio de Gastos de Transporte del 3 de agosto de 1988, publicada en la Gaceta Oficial N° 34.028 del 12 de agosto de 1988, y de conformidad con el artículo 133, literal b) de la Ley Orgánica del Trabajo, en Consejo de Ministros,

**DECRET<sup>A</sup>**

**Artículo 1º:** Se modifica el subsidio a la alimentación y al transporte, contenido en el Decreto N° 247 del 29 de junio de 1994 publicado en la Gaceta Oficial N° 35.493 del 30 de junio de 1994, en los términos siguientes:

Se establece como subsidio a la alimentación y al transporte ochocientos noventa bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 890,50), por jornada de trabajo laborada, para los obreros del Sector Público Nacional y novecientos treinta y tres bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 933,50), por jornada diaria de trabajo laborada para los empleados del mismo sector, que obtengan un ingreso mensual en dinero hasta setenta y cinco mil bolívares (Bs. 75.000,00). El pago del referido subsidio a la alimentación y al transporte se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 194 de la Ley Orgánica del Trabajo.

El derecho a percibir el subsidio previsto en el presente Decreto se extinguirá cuando el trabajador llegare a devengar un ingreso mensual en dinero de noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00).

**Artículo 2º:** Se mantienen en vigencia los artículos Segundo (2º), Cuarto (4º) y Séptimo (7º) del citado Decreto N° 247, que se modifica.

**Artículo 3º:** El presente Decreto se hará efectivo desde el primero de febrero del corriente año, pero las cantidades correspondientes al subsidio a que se refiere este Decreto será exigible cuando el Ente Público respectivo tenga disponibilidad de los recursos económicos que se requieren a este fin.

**Artículo 4º:** El Ministro del Trabajo queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis. Año 185º de la Independencia y 136º de la Federación.

(L. S.)

**RAFAEL CALDERA**

Refrendado:

El Ministro de Relaciones Interiores, RAMON ESCOBAR SALOM  
El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,  
MILOS ALCALAY MIRCOVICH  
El Ministro de Hacienda, LUIS RAUL MATOS AZOCAR  
El Ministro de la Defensa, MOISES OROZCO GRATEROL  
El Ministro de Fomento, WERNER CORRALES LEAL  
El Ministro de Educación, ANTONIO LUIS CARDENAS  
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, PEDRO RINCON GUTIERREZ  
El Ministro de Agricultura y Cría, RAUL ALEGRETT RUIZ  
El Ministro del Trabajo, JUAN NEPOMUCENO GARRIDO MENDOZA  
El Ministro de Transporte y Comunicaciones, CIRO ZAA ALVAREZ  
El Ministro de Justicia, RUBEN CREIXEMS SAVIGNON  
El Ministro de Energía y Minas, ERWIN JOSE ARRIETA VALERA  
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,  
ROBERTO PEREZ LECUNA  
El Encargado del Ministerio del Desarrollo Urbano,  
FRANCISCO GONZALEZ  
La Ministra de la Familia, MERCEDES PULIDO BRICEÑO  
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, ANDRES CALDERA PIETRI  
El Ministro de Estado, POMPEYO MARQUEZ MILLAN  
El Ministro de Estado, FERNANDO LUIS EGAÑA  
El Ministro de Estado, HERMANN LUIS SORIANO VALERY  
El Ministro de Estado, JOSE GUILLERMO ANDUEZA A.  
La Ministra de Estado, MARIA DEL PILAR IRIBARREN DE ROMERO  
El Ministro de Estado, EDGAR PAREDES PISANI  
El Ministro de Estado, CARLOS WALTER VALECILLOS

**JUNTA DE ADMINISTRACION CAMBIARIA**

REPUBLICA DE VENEZUELA  
JUNTA DE ADMINISTRACION CAMBIARIA

Caracas, 09 de febrero de 1996  
184º y 136

**RESOLUCION N° 109**

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 7 y último aparte del artículo 52 del Decreto N° 714 de fecha 14 de junio de 1995,

**RESUELVE****REFORMA PARCIAL DE LA RESOLUCION N° 32 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994.**

**Artículo 1º:** Se modifica el texto del artículo 1º, el cual queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 1º: Se autoriza a las personas naturales, para que adquieran la cantidad de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 2.000,00), o su equivalente en otras divisas, por año calendario, para el pago de gastos efectuados exclusivamente por viajes efectivamente realizados al extranjero, a través de tarjetas de crédito emitidas por empresas emisoras de tarjetas de crédito regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Este monto es adicional a las cantidades establecidas o que se establezcan a los fines previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 52 del Decreto N° 714 de fecha 14 de junio de 1995.

Los usuarios no podrán exceder el monto máximo global permitido, con independencia del número de tarjetas que posea”.

**Artículo 2º:** Se modifica el texto del artículo 5º, el cual queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 5º: Las personas que dolosa o culposamente se excedan del límite autorizado en el artículo 1º de esta Resolución, podrán ser sancionadas conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 714 del 14 de junio de 1995, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra sanción establecida en la legislación venezolana. Se considera que ha habido ausencia de culpa cuando los excesos en que se haya incurrido provengan de hechos de terceros incluyendo, pero sin limitarse a ellos, el robo, pérdida o extravío de las tarjetas de crédito y los fraudes cometidos con dichas tarjetas de crédito, siempre y cuando el usuario notifique o participe a la empresa emisora estos hechos. Salvo en el caso de dolo manifiesto a ellas imputable, las empresas emisoras de tarjetas de crédito no tendrán responsabilidad alguna con motivo de los excesos de los cupos personales asignados en la presente Resolución, en que puedan incurrir las personas naturales usuarias de tarjetas de crédito”.

**Artículo 3º:** Se modifica el texto del artículo 7º, el cual queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 7º: Las empresas emisoras de tarjetas de crédito solicitarán al Banco Central de Venezuela, las divisas que cubran los montos utilizados en el extranjero por los usuarios de tarjetas de crédito, así como los gastos en moneda extranjera, bajo los mismos términos y condiciones establecidas por el referido Banco para la adquisición de divisas en los casos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 52 del Decreto N° 714 de fecha 14 de junio de 1995. Todas las informaciones podrán ser corroboradas por la Oficina Técnica de Administración Cambiaria, mediante auditorías hechas en la forma, condiciones y oportunidades que la Junta o la Oficina determinen”.



**Artículo 4º:** Se agrega un nuevo artículo distinguido con el número 9º, el cual queda redactado en los términos siguientes:

**"Artículo 9º:** Los usuarios de tarjetas de crédito que a la presente fecha se hayan excedido del límite autorizado en el artículo 1º de esta Resolución, ya establecido en la Resolución N° 32 de fecha 26 de septiembre de 1994, dictada por esta Junta de Administración Cambiaria, podrán hasta el 31 de mayo del presente año, reintegrar por intermedio del Banco Central de Venezuela el equivalente en bolívares de las divisas gastadas por exceso al tipo cambio vigente para la fecha del reintegro. Efectuado dicho pago, quedarán sin efecto las suspensiones del uso de las tarjetas de crédito en el exterior".

**Artículo 5º:** Se agrega un nuevo artículo distinguido con el número 10, el cual queda redactado en los siguientes términos:

**"Artículo 10:** Los usuarios de tarjetas de crédito en el exterior, que a partir de la presente fecha, se excedan en el gasto de divisas del límite autorizado en el artículo 1º de esta Resolución, podrán reintegrarlas por intermedio del Banco Central de Venezuela en bolívares al tipo de cambio vigente a la fecha del reintegro, dentro del término de 30 días continuos, contados a partir del momento de la suspensión de las tarjetas".

**Artículo 6º:** Se agrega un nuevo artículo con el número 11, el cual queda redactado en los siguientes términos:

**"Artículo 11:** Aquellos tarjetahabientes que no realizaren dentro del lapso indicado los reintegros determinados por el exceso en el uso de las tarjetas de crédito, serán sancionados conforme lo dispone el Decreto N° 714 del 14 de junio de 1995 sin perjuicio de la aplicación de medidas preventivas y otras sanciones.

La Oficina Técnica de Administración Cambiaria definirá y elaborará los procedimientos para realizar los reintegros señalados".

**Artículo 7º:** Imprimase a continuación el texto íntegro de la Resolución N° 32 de fecha 28 de septiembre de 1994, con las reformas aquí introducidas, córrase la numeración y sustitúyanse por los de la presente, la fecha, firmas y demás datos de identificación.

**Comuníquese y Publíquese**

**RAFAEL ALBERTO PEÑA ALVAREZ**

**GERMAN XAVIER BRICEÑO**

**ESTELA HIDALGO**

**GONZALO AGUIRRE**

**ARMANDO CORDOVA**

**REPUBLICA DE VENEZUELA  
JUNTA DE ADMINISTRACION CAMBIARIA**

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 7 y último aparte del artículo 52 del Decreto N° 714 del 14 de junio de 1995.

#### **RESUELVE**

**Artículo 1º:** Se autoriza a las personas naturales, para que adquieran la cantidad de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 2.000,00), o su equivalente en otras divisas, por año calendario, para el pago de gastos y cualesquiera otras erogaciones efectuadas exclusivamente con motivo de viajes al extranjero, a través de tarjetas de crédito emitidas por empresas emisoras de tarjetas de crédito regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Este monto es adicional a las cantidades establecidas o que se establezcan a los fines previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 52 del Decreto N° 714 del 14 de junio de 1995.

Los usuarios no podrán exceder el monto máximo global permitido, con independencia del número de tarjetas que posea.

**Artículo 2º:** Las empresas emisoras de tarjetas de crédito estarán en la obligación de inscribirse en el Registro correspondiente que, al efecto, llevará la Oficina Técnica de Administración Cambiaria, en los términos y condiciones establecidas por esta Oficina.

**Artículo 3º:** A efectos de controlar los montos en divisas extranjeras utilizadas por los usuarios de tarjetas de crédito, las empresas emisoras de tarjetas de crédito celebrarán, por órgano de la Cámara de Crédito de Venezuela, un contrato con un organismo independiente y neutral que tendrá a su cargo la centralización, cruce y procesamiento de toda la información que le será suministrada por las diversas empresas emisoras de tarjetas de crédito, en relación con los consumos en divisas extranjeras efectuado de conformidad con esta Resolución. Dicho organismo independiente, de acuerdo con los términos del respectivo contrato que se celebre, se obligará a notificar a la Oficina Técnica de Administración Cambiaria el nombre completo y el número de Cédula de Identidad de las personas que se hayan excedido del cupo máximo personal autorizado por la presente Resolución, luego que le referido organismo haya verificado por los medios que tengan a su disposición, con la colaboración de las correspondiente empresas emisoras de tarjetas de crédito, que los consumos en cuestión se corresponden con consumos efectivamente realizados por la persona a quien se le atribuyen. En el mencionado contrato se establecerán los mecanismos y las oportunidades para el suministro de las informaciones arriba referidas.

La Junta de Administración Cambiaria aprobará el contrato aludido en el párrafo anterior así como cualquier modificación posterior, si la hubiere, en el entendido de que las empresas emisoras de tarjetas de crédito no autorizarán el uso de tarjetas de crédito a los efectos previstos en esta Resolución, hasta tanto la Junta de Administración Cambiaria imparta la aprobación en cuestión.

**Artículo 4º:** Las empresas emisoras de tarjetas de crédito suspenderán inmediatamente, en forma temporal o definitiva, de conformidad con los respectivos contratos que rigen su utilización, el uso en el exterior de las tarjetas de crédito de aquellas personas indicadas por el organismo encargado de centralizar el procesamiento de la información de dichos consumos; que se hubieran excedido en el monto a que se refiere el Artículo 1º de esta Resolución, utilizando a los fines de la mencionada suspensión cualquier mecanismo usualmente empleado a estos fines.

**Artículo 5º:** Las personas que dolosa o culposamente se excedan del límite autorizado en el artículo 1º de esta Resolución, podrán ser sancionadas conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 714 del 14 de junio de 1995, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra sanción establecida en la legislación venezolana. Se considera que ha habido ausencia de culpa cuando los excesos en que se haya incurrido provengan de hechos de terceros incluyendo, pero sin limitarse a ellos, el robo, pérdida o extravío de las tarjetas de crédito y los fraudes cometidos con dichas tarjetas de crédito, siempre y cuando el usuario notifique o participe a la empresa emisora estos hechos. Salvo en el caso de dolo manifiesto a ellas imputable, las empresas emisoras de tarjetas de crédito no tendrán responsabilidad alguna con motivo de los excesos de los cupos personales asignados en la presente Resolución, en que puedan incurrir las personas naturales usuarias de tarjetas de crédito.

**Artículo 6º:** A los fines de hacer posible el cumplimiento del objeto de la presente Resolución, el Banco Central de Venezuela queda autorizado para la venta de las divisas a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, y éstas, a su vez, para su venta a los usuarios de estas tarjetas, de conformidad con los términos y condiciones previstas en esta misma Resolución.

**Artículo 7º:** Las empresas emisoras de tarjetas de crédito solicitarán al Banco Central de Venezuela, las divisas que cubran los montos utilizados en el extranjero por los usuarios de tarjetas de crédito, así como los gastos en moneda extranjera, bajo los mismos términos y condiciones establecidas por el referido Banco para la adquisición de divisas en los casos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 52 del Decreto N° 714 de fecha 14 de junio de 1995. Todas las informaciones podrán ser corroboradas por la Oficina Técnica de Administración Cambiaria, mediante auditorías hechas en la forma, condiciones y oportunidades que la Junta o la Oficina determinen.

**Artículo 8º:** Los consumos en divisas realizados de conformidad con lo previsto en la presente Resolución deberán ser facturados por las correspondientes empresas emisoras, indicando el monto de la divisa extranjera y su conversión en moneda de curso legal en Venezuela, al cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela para el día en que fue asentado dicho consumo en la cuenta del usuario.

**Artículo 9º:** Los usuarios de tarjetas de crédito que a la presente fecha se hayan excedido del límite autorizado en el artículo 1º de esta Resolución, ya establecido en la Resolución N° 32 de fecha 26 de septiembre de 1994, dictada por esta Junta de Administración Cambiaria, podrán hasta el 31 de mayo del presente año, reintegrar por intermedio del Banco Central de Venezuela el equivalente en bolívares de las divisas gastadas por exceso al tipo cambio vigente para la fecha del reintegro. Efectuado dicho pago, quedarán sin efecto las suspensiones del uso de las tarjetas de crédito en el exterior".

**Artículo 10:** Los usuarios de tarjetas de crédito en el exterior, que a partir de la presente fecha, se excedan en el gasto de divisas del límite autorizado en el artículo 1º de esta Resolución, podrán reintegrarlas por intermedio del Banco Central de Venezuela en bolívares al tipo de cambio vigente a la fecha del reintegro, dentro del término de 30 días continuos, contados a partir del momento de la suspensión de las tarjetas".

**Artículo 11:** Aquellos tarjetahabientes que no realizaren dentro de los lapsos indicado los reintegros determinados por el exceso en el uso de las tarjetas de crédito, serán sancionados conforme lo dispone el Decreto N° 714 del 14 de junio de 1995 sin perjuicio de la aplicación de medidas preventivas y otras sanciones.

La Oficina Técnica de Administración Cambiaria definirá y elaborará los procedimientos para realizar los reintegros señalados.

**Artículo 12:** Los casos especiales que se presenten con motivo de la aplicación de la presente Resolución serán resueltos por la Junta de Administración Cambiaria.

Comuníquese y Publíquese:

RAFAEL ALBERTO PEÑA ALVAREZ

GERMAN XAVIER BRICEÑO

ESTELA HIDALGO

GONZALO AGUIRRE

ARMANDO CORDOVA

REPUBLICA DE VENEZUELA  
JUNTA DE ADMINISTRACION CAMBIARIA

Caracas, 09 de febrero de 1.996  
185° y 136°

RESOLUCION N° 110

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 714 de fecha 14 de junio de 1995, en concordancia con el numeral 36 del artículo 2º del Reglamento Interno de la Junta de Administración Cambiaria, se resuelve:

**Artículo Unico:** Se nombra a la doctora ESTELA HIDALGO, Director Coordinador de la Junta de Administración Cambiaria en sustitución del Dr. Germán Xavier Briceño.

Comuníquese y Publíquese

RAFAEL ALBERTO PEÑA ALVAREZ

ARMANDO CORDOVA

GONZALO AGUIRRE

GERMAN XAVIER BRICEÑO

ESTELA HIDALGO

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPUBLICA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE PERSONAL

D. G. S. P. N° 030

Caracas, 08 de febrero de 1996

185° y 136°

### RESUELTO:

De conformidad con lo dispuesto en el Ordinal 25 del Artículo 20, de la Ley Orgánica de la Administración Central, se encarga de la Dirección General Sectorial de Política Internacional, al ciudadano Embajador EDMUNDO GONZALEZ URRUTIA, C.I.N° 2.029.003, a partir de la presente fecha. De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1.969, se delega en el referido ciudadano, la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, los cuales se especifican a continuación:

1.- Oficios, notas, memoranda, circulares, instrucciones de servicio, radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el exterior,

2.- Comunicaciones dirigidas a las Misiones Diplomáticas permanentes extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional y a los Organismos Internacionales;

3.- Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Públicos y privados;

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3º del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

Comuníquese y Publíquese,

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS  
Ministro de Relaciones Exteriores



**MINISTERIO DE HACIENDA**

REPUBLICA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DE HACIENDA**

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

CARACAS. 02 FEB 1996 No. -

1852 y 1362

70

La Superintendencia de Seguros en fecha 22 de mayo de 1994, mediante Auto N° 302-94-0063 dió inicio a una averiguación administrativa contra la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 2.802.362. Agente Exclusivo Definitivo de "C.A.V. SEGUROS CARACAS", autorizada bajo el N° 13-1.614 en fecha 29 de enero de 1992, en virtud de la denuncia formulada por la citada empresa, mediante la cual se notifica a este Organismo, que la mencionada ciudadana efectuó el cobro de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 182.989,00), por concepto de primas y no depositó el monto recaudado en la caja de la empresa de seguros como era su obligación.-

A objeto de esclarecer los hechos denunciados, la Superintendencia de Seguros procedió a notificar en fecha 16 de agosto de 1994, mediante oficio N° HSS-300-2-436 a la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA, de la averiguación iniciada en su contra por presunta apropiación de primas denunciada por "C.A.V. SEGUROS CARACAS" y asimismo se le citó mediante Telegrama de fecha 30 de junio de 1994, distinguido bajo el N° HSS-300-2-140-2540 a fin de que compareciera ante este Organismo a objeto de conocer los hechos que le han sido imputados y que formulara sus alegatos de defensa; por cuanto que la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA no dió cumplimiento a dicha citación, se dió por notificada.-

La Superintendencia de Seguros siendo la oportunidad para decidir se permite observar:

Del escrito de denuncia de "C.A.V. SEGUROS CARACAS" se hace constar que la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA, recibió por parte de un asegurado la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 153.799,00), correspondientes a los recibos de primas Nros. 788753, 558421, 788450, 120670 y 2014806, los cuales están debidamente firmados por la Agente Exclusiva Definitiva en fechas 14 y 26 de mayo de 1993, al pie de los citados recibos hay una nota marginal donde se lee "Certificamos que es copia fiel y exacta del original que reposa en poder del cliente", firmada por el ciudadano PEDRO AQUIQUE en su carácter de Vice-Presidente de Administración de "C.A.V. SEGUROS CARACAS".-

En fecha 22 de septiembre de 1994, mediante escrito signado bajo el N° 8176, "C.A.V. SEGUROS CARACAS" ratifica el mérito favorable de su denuncia en cuanto a los recibos de primas Nros. 788753, 558421, 788450, 120670 y 2014806, que alcanzan a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 153.799,00), y pide asimismo se desestime la denuncia por el recibo N° 367063, por VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA BOLIVARES (Bs. 29.190,00), cantidad ésta que efectivamente ingresó a la caja de la empresa, pero que por un error involuntario se incluyó en la denuncia.-

La Superintendencia de Seguros una vez analizados los recaudos anexos al expediente, observa que la conducta de la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA, no se adecúa a lo previsto en el Artículo 148 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que dispone que los productores de seguros se consideran depositario de las primas recaudadas por ellos, hasta tanto los entreguen a

las empresas por cuya cuenta hayan efectuado el cobro; que el Reglamento de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros sobre el Cobro de Primas por los Intermediarios de Seguros, establece en su Artículo 1º los lapsos en los cuales los intermediarios de seguros deben entregar a las empresas de seguros del monto correspondiente de las primas recaudadas por su intermediación; que en el caso de los Agentes Exclusivos de las empresas de seguros o sociedades de corretaje de seguros es el día hábil siguiente a la fecha en que se hubiere efectuado el cobro; en el presente caso tal y como consta en las copias certificadas de los Recibos de Primas Nros. 788753, 558421, 788450, 120670 y 2014806, el cobro fue efectuado los días 14 y 26 de mayo de 1993 y a la fecha de la denuncia la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA, no había ingresado el monto recaudado por concepto de primas en la caja de "C.A.V. SEGUROS CARACAS".-

Visto que el Artículo 143 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros faculta a la Superintendencia de Seguros para sancionar a los productores de seguros, con penas que van, según la gravedad de la falta, desde sanciones pecuniarias hasta la revocatoria de la autorización para actuar como intermediario de seguros. Dicha norma está íntimamente vinculada a la función contralora que en materia de intermediación de seguros le asigna la Ley al órgano administrativo, para lo cual no tiene fijados límites de oportunidad, pues se entiende que en casos como el presente, impera sobre la Superintendencia de Seguros, una obligación permanente de corregir los vicios cometidos por los productores de seguros en el ejercicio de sus labores de mediación, toda vez que el productor de seguros, lejos de lesionar los intereses de los asegurados debe velar en todo caso por la seguridad de tales intereses y una de estas maneras es haciendo entrega del dinero recaudado por concepto de primas a la empresa de seguros.-

En el presente caso hay una evidente transgresión a la letra g) del Artículo 143 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por cuanto que como quedó demostrado la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA cobró la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 153.799,00) como consta en los Recibos de Primas Nros. 788753, 558421, 788450, 120670 y 2014806 y no hizo entrega de dicho dinero a la empresa "C.A.V. SEGUROS CARACAS", determinando la Superintendencia de Seguros que la mencionada productora de seguros dispuso en beneficio propio o de un tercero del dinero recaudado por concepto de primas, como lo prevé la letra g) del Artículo 143 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

La Superintendencia de Seguros considera que la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA se ha hecho acreedora a la pena máxima prevista en la mencionada disposición.

Asimismo transgredió el Artículo 148 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, el Artículo 1º del Reglamento de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros sobre el Cobro de Primas por los Intermediarios de Seguros y al desacatar la citación de que fue objeto por parte de este Organismo, transgredió el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.-

En consecuencia la Superintendencia de Seguros en uso de sus facultades legales, decide:

**PRIMERO:** Revocar la autorización de Agente Exclusivo Definitivo N° 13-1.614 otorgada en fecha 29 de enero de 1992 a la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA, antes identificada.

**SEGUNDO:** Anular mediante la inserción de la nota marginal, la inscripción N° 13-1.614 asentada en el Registro de Agentes Exclusivos de C.A.V. SEGUROS CARACAS.

**TERCERO:** Notificar a la ciudadana EVELIN FERMIN CABRERA, que de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo Segundo del Artículo 183 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, la revocatoria de su autorización para actuar como Agente Exclusivo tiene carácter definitivo y no puede dedicarse de nuevo a la intermediación de seguros.

Contra la presente decisión podrá ser ejercido el Recurso de Reconsideración previsto en el Artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.-

Publíquese y Comuníquese.

**MORELIA J. CORREDOR O.**  
Superintendente de Seguros

## MINISTERIO DE LA DEFENSA

REPÚBLICA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DE LA DEFENSA  
DIRECCIÓN GENERAL

No. 5224

CARACAS,

08 FEB 1996

1852 y 1362

### RESOLUCION:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en los Artículos 51, 53 y 62 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia relación con el Numeral 13 del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Central, previa aprobación del Señor Presidente de la República, en Cuenta No. 106 del 18 de abril de 1995, se concede PENSION DE SOBREVIVIENTE POR VIA DE GRACIA a los ciudadanos NORIS COROMOTO LAMEDA DE PANNACCI, titular de la Cédula de Identidad No. 5.355.433; ORLANDO JOSE PANNACCI LAMEDA, Titular de la Cédula de Identidad No. 12.939.038 y AURIMAR ELENA PANNACCI LAMEDA, Titular de la Cédula de Identidad No. 12.722.254, cónyuge e hijos respectivamente del Sub-Teniente (Ejército) de Reserva ORLANDO JOSE PANNACCI, quien falleció el día 18 de Junio de 1992 en Actos del Servicio, cuando cumplía funciones de apoyo a la Sección de Inteligencia de la 4ta. División de Infantería. El monto de la Pensión es de TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SESENTA CENTÍMOS (Bs. 32.079,60), para la ciudadana NORIS COROMOTO LAMEDA DE PANNACCI y la cantidad de VEINTIUM MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON CUARENTA CENTÍMOS (Bs. 21.386,40), que será distribuido en partes iguales entre los ciudadanos ORLANDO JOSE Y AURIMAR ELENA PANNACCI LAMEDA. Dicho beneficio será cancelado a través de la Dirección General Sectorial de Administración de este Ministerio con cargo a la partida de pensiones.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,

**MOISES A. OROZCO GRATEROL**  
Ministro de la Defensa

## MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

*República de Venezuela*

*Ministerio de Sanidad y Asistencia Social*

No. SG.-033

Caracas,

08 DE FEBRERO DE 1.996

### Resuelto:

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República y de conformidad con lo establecido en los Artículos 6to. Ordinal 2do., 4to. Ordinal 2do. y 36 de la Ley de Carrera Administrativa, se designa Ciudadano DAVID RAMON PADRON RIVAS titular de la Cédula de Identidad No. 2.753.593, como DIRECTOR GENERAL SECTORIAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, a partir del 15-2-96, en sustitución de la Lic. Carmela Colapinto de Rosales, titular de la Cédula de Identidad No. 6.001.952 quien pasa al cargo de Directora General Sectorial de Recursos Humanos.

Se deroga la Resolución No. SG-431 de fecha 16 de agosto de 1994.

Comuníquese y Publíquese,

**PEDRO RINCON GUTIERREZ**  
Ministro de Sanidad y Asistencia Social

REPÚBLICA DE VENEZUELA

## MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

NUMERO SG.-034

08 DE FEBRERO DE 1996  
185° Y 136°

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 20, Ordinal 25 y Artículo 30 Ordinales 2° y 5° de la Ley Orgánica de la Administración Central, en concordancia con el Artículo 10 de la Ley de Sanidad Nacional.

### CONSIDERANDO

Que el Sistema Nacional de Salud es competencia del Poder Nacional por órgano del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

### RESUELVE

**ARTICULO 1°:** Se designa como Presidente del VIII Congreso Venezolano de Salud Pública al DR. CARLOS E. CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 51.773, Vice-Presidente al DR. JOSE MARIA CARRILLO, titular de la cédula de identidad N° 41.855 y Secretario General al DR. ELBANO PIERUZZI, titular de la cédula de identidad N° 1.891.762.

**ARTICULO 2°:** La Comisión designada coordinará las actividades que compete a este Ministerio en el VIII Congreso Venezolano de Salud Pública.

Comuníquese y Publíquese,

**PEDRO RINCON GUTIERREZ**  
Ministro de Sanidad y Asistencia Social



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA**

REPUBLICA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA**DESPACHO DEL MINISTRO - Nº DM/ 037 - CARACAS, 08-02-96  
AÑOS 185º y 136º**RESOLUCION**

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 36 de la Ley de Carrera Administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 eiusdem, se Encarga, a partir del 12-02-96 y mientras dure la ausencia de su titular, al ciudadano **JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ**, titular de la cédula de identidad Nº 5.217.224, de la Dirección General Sectorial de Mercadeo Agrícola de este Ministerio; y, en ejercicio de la facultad que confiere el numeral 25 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Central, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se le autoriza para firmar todo lo concerniente a la Dirección a su cargo.

Comuníquese y Publíquese.  
Por el Ejecutivo Nacional,

**RAUL ALEGRETT**  
Ministro de Agricultura y Cría

REPUBLICA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA**DESPACHO DEL MINISTRO - Nº DM/ 038 - CARACAS, 08-02-96  
AÑOS 185º y 136º**RESOLUCION**

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 36 de la Ley de Carrera Administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 eiusdem, se Encarga, a partir del 02-02-96 hasta el 31-03-96, al ciudadano **TULIO AMAYA**, titular de la cédula de identidad Nº 2.937.562, de la Dirección de Operación y Mantenimiento adscrito a la Dirección General Sectorial de Infraestructura Agrícola de este Ministerio; y, en ejercicio de la facultad que confiere el numeral 25 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Central, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se le autoriza para firmar todo lo concerniente a la Dirección a su cargo.

Comuníquese y Publíquese.  
Por el Ejecutivo Nacional,

**RAUL ALEGRETT**  
Ministro de Agricultura y Cría

REPUBLICA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA**

DESPACHO DEL MINISTRO- Nº DM/ 039 - Caracas. 08-02-96

**RESOLUCION**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 20 de la Ley de Pesca, en concordancia con el artículo 31 ordinal 1º de la Ley Orgánica de la Administración Central, este Despacho

**RESUELVE**

**Artículo 1º.-** El ordenamiento de pesquerías industriales de fondo se basa en el criterio de participación de los productores en el manejo del recurso pesquero, cuyos objetivos fundamentales son los siguientes:

- 1.- Optimizar la explotación de los recursos pesqueros en las distintas áreas de pesca de arrastre en zona jurisdiccional venezolana, sobre una base sustentable y en armonía con el medio ambiente natural.
- 2.- Promover la participación activa de las organizaciones de productores pesqueros en la definición e instrumentación de los planes experimentales de manejo de pesquerías de arrastre.
- 3.- Implantar un esquema dinámico de ordenamiento de pesquerías.

**Artículo 2º.-** Se selecciona el esfuerzo óptimo de pesca, estimado para cada zona pesquera, como parámetro de manejo de pesquería, el cual será fijado anualmente por el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA).

Se entiende por:

**Esfuerzo óptimo de pesca:** el número total de días de ausencia, que la flota operativa ejerce en una zona de pesca y que corresponde a la máxima captura permisible, considerando la biomasa total y la importancia económica de las especies capturadas. Una vez cuantificado y establecido el esfuerzo óptimo de pesca en términos de días de ausencia por zona, se podrá asignar el cupo de esfuerzo correspondiente a cada asociación e individual por unidad de pesca.

**Cuota individual:** aquella a ser asignada para cada unidad operativa y resultará de dividir el esfuerzo de pesca óptimo para toda la flota, entre el número de unidades operativas en cada puerto-base o mediante un mecanismo de ponderación que el Ejecutivo establezca.

**Artículo 3º.-** Se crean los Comités Locales de Seguimiento (CLOSE) para cada zona de pesca, los cuales, operarán en cada puerto-base. La integración de los Comités Locales de Seguimiento (CLOSE) será de la siguiente manera: un representante del Ministerio de Agricultura y Cría-Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA), quien los coordina; un representante de la asociación o asociaciones que operen en cada zona; un representante de un organismo científico acreditado en la jurisdicción; un representante de las Fuerzas Armadas de Cooperación; un representante del Ejecutivo estatal y un representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Capitanía de Puerto respectiva).

**Artículo 4º.-** El Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA), asignará anualmente el esfuerzo óptimo por zona de pesca a ser distribuido por las asociaciones de pesca en cada zona o área de pesca, y supletoriamente, las cuotas individuales por barco-tipo, según lo determinado por las investigaciones realizadas por el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA).

**Artículo 5º.-** A partir del 1º de diciembre hasta el 31 del mismo mes de cada año, las asociaciones de pesca de arrastre propondrán al Ejecutivo Nacional la distribución del esfuerzo total por zona, entre las cuotas individuales, según los criterios de clasificación de la flota que se adopten.

**Artículo 6º.-** Una vez recibidas las propuestas referentes a la distribución de las cuotas de esfuerzo individual, a que se refiere el artículo anterior, corresponderá al Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA) asignarlas para cada flota y zona de pesca dentro de los primeros cinco días del mes de enero de cada año.

En caso de que las asociaciones de pesca de arrastre no suministren los datos oportunamente, el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA) asignará las cuotas individuales de esfuerzo pesquero bajo el criterio técnico más conveniente.

**Artículo 7°.-** En casos justificados las asociaciones de pesca de arrastre podrán canalizar la solicitud de una redistribución de los cupos individuales, a través de los Comités Locales de Seguimiento (CLOSE) y la misma deberá ser autorizada por el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA) antes de establecerla.

**Artículo 8°.-** Se establecen como zonas de pesca de arrastre las señaladas en la Resolución MAC-046/MARNR-103 y MAC-391, así como las distancias de la costa explícitamente indicadas en las mismas. Los puerto-base correspondientes serán: Cumaná, Guiría, Punto Fijo, Puerto Cabello y Puerto La Cruz. Las áreas de pesca integradas serán señaladas en la providencia administrativa correspondiente.

**Artículo 9°.-** Se derogan expresamente los lapsos de veda contemplados en los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Resolución MAC-46/MARNR-103, publicada en Gaceta Oficial N° 31.916 de fecha 1° de febrero de 1980 e igualmente los lapsos previstos en la Resolución MAC-302 publicada en Gaceta Oficial N° 35.041 de fecha 03-09-92.

Comuníquese y publíquese.  
Por el Ejecutivo Nacional,

**RAUL ALEGRETT**  
Ministro de Agricultura y Cría

#### REPUBLICA DE VENEZUELA

#### MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA

DESPACHO DEL MINISTRO - DM/N°040-CARACAS, 08-02-96  
AÑOS 185° Y 136°

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, ordinal 1° de la Ley Orgánica de la Administración Central, en concordancia con los artículos 40 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, 6° de la Ley de Mercadeo Agrícola y 1°, literal m, del Decreto N° 243 de fecha 27 de junio de 1994, y 2, del Decreto N° 3116 de fecha 26 de agosto de 1993, que crea el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA), por disposición del ciudadano Presidente de la República, este Despacho:

#### RESUELVE

**Artículo 1.-** Se fija en todo el territorio nacional, el precio de la sardina a nivel de productor en los términos siguientes:

A partir del primero de febrero del presente año, a razón de doce bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 12,50) el kilogramo

A partir del primero de mayo del presente año, a razón de quince bolívares (Bs. 15,00) el kilogramo.

**Artículo 2.-** Queda encargado el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA), de realizar el seguimiento a los costos de insumos factoriales, aplicables a la producción pesquera sardinera.

**Artículo 3.-** De acuerdo al artículo anterior, el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA) entregará periódicamente a la Federación de Pescadores y a la Cámara de Enlatadores, el índice de inflación específica acumulada de los insumos de la actividad, a los efectos que procedan ambos entes, a una actualización de los precios. Los precios y condiciones convenidas deberán ser notificados al Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas, a los fines de su oficialización.

**Artículo 4.-** Se adopta la tabla de cubicación, indicadores de densidad y la relación volumen-peso, determinada por el Servicio Autónomo de Metrología del Ministerio de Fomento.

**Artículo 5.-** Queda derogada la Resolución Nros 2782 y 228 de fecha 24 de octubre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.573 de fecha 25 de octubre de 1994, en lo concerniente al rubro objeto de esta Resolución.

Comuníquese y Publíquese,  
Por el Ejecutivo Nacional,

**RAUL ALEGRETT**  
Ministro de Agricultura y Cría

### MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

#### REPUBLICA DE VENEZUELA

#### MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

DESPACHO DEL MINISTRO  
N°. 13 Caracas 12 de Febrero de 1996

Años 185° y 136°

En uso de la atribución conferida en el artículo 10 de los Estatutos Sociales de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), se designa para integrar la Junta Directiva de la misma como Director Principal a la ciudadana Carmen Carrillo, portadora de la cédula de identidad N° 3.883.147, en sustitución del ciudadano Alejandro Rodríguez Ferrara.

Comuníquese y Publíquese

**CIRO ZAA ALVAREZ**  
Ministro de Transporte y Comunicaciones



**MINISTERIO DEL DESARROLLO URBANO**

REPUBLICA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DEL DESARROLLO URBANO**Número: 2300  
Fecha: 8-2-1996

185° y 136°

**RESOLUCION**

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República y Resolución de este Despacho, se designa a partir del 01 de Enero de 1996, al Lic. **CANDIDO JOSE GOMEZ NIÑO**, titular de la cédula de identidad N° 6.370.021, como Director de Informática, adscrito a la Oficina de Sistemas de este Ministerio.

Comuníquese y Publíquese  
Por el Ejecutivo NacionalFRANCISCO GONZALEZ  
Ministro del Desarrollo Urbano (E)

REPUBLICA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DEL DESARROLLO URBANO**NUMERO : 2301  
FECHA: 8-2-1996

185° y 136°

**RESOLUCION**

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República y Resolución de este Despacho, se designa desde el 05 de Febrero de 1996 hasta el 20 de Marzo de 1996, al ciudadano Lic. **FRANCISCO CUMANA S**, titular de la cédula de identidad N° 4.239.794, encargado de la Dirección de Finanzas, adscrito a la Dirección General Sectorial de Administración y Servicios de este Ministerio, por vacaciones de su titular.

Comuníquese y Publíquese  
Por el Ejecutivo NacionalFRANCISCO GONZALEZ  
Ministro del Desarrollo Urbano (E)

REPUBLICA DE VENEZUELA

**MINISTERIO DEL DESARROLLO URBANO**Número: 2302  
Fecha: 8-2-1996

185 y 136

**RESOLUCION**

Por disposición del Ciudadano Presidente de la República y Resolución de este Despacho, se designa a partir del 01 de enero de 1996, a la ciudadana Lic. **YELET AMADA CAMPOS DE PERAZA**, titular de la cédula de identidad N° 3.230.197, como Directora de Desarrollo Organizativo, adscrita a la Oficina de Sistemas de este Ministerio.

Comuníquese y Publíquese  
Por el Ejecutivo NacionalFRANCISCO GONZALEZ  
Ministro del Desarrollo Urbano (E)**CONSEJO DE LA JUDICATURA**

REPUBLICA DE VENEZUELA

**CONSEJO DE LA JUDICATURA**

Número 615

16 de enero de 1996  
185° y 136°

El Consejo de la Judicatura, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica que lo rige, y de conformidad con lo previsto en el artículo 69 la Ley Orgánica del Poder Judicial,

**CONSIDERANDO**

Que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 69 establece que hay falta absoluta de los suplentes y conueces, por equipararse a una renuncia, en los casos de negativa o excusa injustificada de éstos para suplir las faltas temporales del titular,

**CONSIDERANDO**

Que el Reglamento Sobre Convocatorias de Suplentes y Conueces, dictado por el Consejo de la Judicatura mediante Resolución número 342 de fecha

27 de julio de 1995, publicada en la Gaceta Oficial número 35.768 de fecha 7 de agosto de 1995, en su artículo segundo prevé que al inadmitirse una excusa mediante providencia del Juez respectivo, el Consejo de la Judicatura procederá a declarar la falta absoluta del suplente,

#### CONSIDERANDO

Que la abogada EVA DEL CARMEN MONSALVE DIAZ ostenta el cargo de primer suplente del Juzgado del Distrito Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y en tal carácter fue convocada para suplir la falta temporal del abogado LUIS FELIPE MEJIA BLANCO, Juez Provisorio del referido Tribunal, habiéndose excusado.

#### CONSIDERANDO

Que el Juez LUIS FELIPE MEJIA BLANCO inadmitió, mediante providencia de fecha 18 de diciembre de 1995, las excusas presentadas por la abogada EVA DEL CARMEN MONSALVE DIAZ,

#### RESUELVE

UNICO: Se declara la vacante absoluta del cargo de primer suplente del Juzgado del Distrito Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura, en Caracas a los dieciséis días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis.

Comuníquese y Publíquese

JESUS CABALLERO ORTIZ  
Presidente

CARLOS MORENO BRANDT  
Vicepresidente

Magistrados

TRINA CALDERA DE HERNANDEZ

GISELA PARRA MEJIAS

REPUBLICA DE VENEZUELA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Número 621

25 de enero de 1996  
185° y 136°

El Consejo de la Judicatura, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica que lo rige, y de conformidad con lo previsto en los artículos 9, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

#### CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 69 establece que hay falta absoluta de los suplentes y conjuces, por equipararse a una renuncia, en los casos de negativa o excusa injustificada de éstos para suplir las faltas temporales del titular,

#### CONSIDERANDO

Que el Reglamento Sobre Convocatoria de Suplentes y Conjuces, dictado por el Consejo de la Judicatura mediante Resolución número 342 de fecha 27 de julio de 1995, publicada en la Gaceta Oficial número 35.768 de fecha 7 de agosto de 1995, en su artículo segundo prevé que al inadmitirse una excusa mediante providencia del juez respectivo, el Consejo procederá a declarar la falta absoluta del suplente,

#### CONSIDERANDO

Que la abogada FRANCIA SANCHEZ SOMOZA, ostenta el cargo de primer suplente de la Defensoría Pública Cuadragésimasexta de Presos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y en tal carácter fue convocada para suplir la falta temporal de la abogada MARGARITA MARIN DE DOMINGUEZ, Defensora Pública de Presos de la referida Defensoría, habiéndose excusado.

#### CONSIDERANDO

Que la abogada MARGARITA MARIN DE DOMINGUEZ inadmitió mediante providencia de fecha 12 de enero de 1996, la excusa presentada en esa misma fecha por la abogada FRANCIA SANCHEZ SOMOZA.

#### RESUELVE

UNICO: Se declara la vacante del cargo de primer suplente de la Defensoría Pública Cuadragésimasexta de Presos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura, en Caracas, a los veinticinco días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis.

Comuníquese y Publíquese

CARLOS MORENO BRANDT  
Presidente (E)

Magistrados

TRINA CALDERA DE HERNANDEZ

GISELA PARRA MEJIAS

ALBERTO PEREZ MARCANO

ALCIRA SURTH VELASQUEZ  
Secretaria

## CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REPUBLICA DE VENEZUELA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA  
ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA

No. 010

30 de enero de 1996  
185° y 136°

#### RESOLUCION

Por cuanto los artículos 5 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y 11 de su Reglamento se-



ñalan la obligación de someter a la aprobación previa de la Contraloría General de la República todo proyecto de adquisición de buques o accesorios por organismos públicos o empresas en las cuales el Estado tenga participación.

Por cuanto en la empresa REMOLQUES ORINOCO, C.A. (REMORCA) el Estado venezolano tiene una participación del 8.60% de su capital social por conducto del Fondo de Inversiones de Venezuela y Corporación Venezolana del Suroeste.

Por cuanto el ciudadano VICTOR MANUEL NUÑEZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad No. 1.441.894, en su carácter de Presidente de la citada empresa REMOLQUES ORINOCO, C.A. (REMORCA) no sometió a la aprobación previa de este Organismo Contralor el proyecto para la adquisición de treinta y siete (37) gabarras de bodega abierta a la empresa TRINITY MARINE GROUP/TRINITY INDUSTRIES, INC, por un monto total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES AMERICANOS (US\$ 7.833.221,00) durante el año 1993, adquisición que efectivamente se concretó según consta en la carta contrato de fecha 13 de marzo de 1993, celebrado entre REMORCA y la empresa TRINITY MARINE GROUP.

Por cuanto al no someter a la aprobación previa de esta Contraloría el proyecto de adquisición de las mencionadas gabarras, se impidió el ejercicio de las funciones de control previo que con respecto a ese tipo de operaciones prevé la citada Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional; y por cuanto esa conducta está tipificada como causal de sanción pecuniaria en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, quien suscribe, Director General de Control de la Administración Descentralizada, actuando por delegación del ciudadano Contralor General de la República según Resolución No. DC-2-3-R-085 del 01-07-94, publicada en la Gaceta Oficial No. Extraordinario 4.744, del 06-07-94, en concordancia con la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 10 del Reglamento Interno de esta Contraloría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial N° Extraordinario 4.408, del 1° de abril de 1992, resuelve imponer multa al ciudadano VICTOR MANUEL NUÑEZ RODRIGUEZ, anteriormente identificado, por un monto de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00), por los hechos antes descritos.

Notifíquese personalmente al sancionado el contenido de la presente Resolución y adviértasele que contra esa decisión podrá ejercer el recurso previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 114 ejusdem, dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la notificación.

Comuníquese y publíquese.

FILIPPO VAGNONI  
Director General de Control de la  
Administración Descentralizada

REPÚBLICA DE VENEZUELA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ESTADOS Y MUNICIPIOS  
DIRECCION DE CONTROL DE ESTADOS

Caracas, 23 NOV. 1995

RESOLUCION N° DCEM-R-068

185° 136°

Mediante escrito de fecha 31 de julio de 1995, recibido en este Organismo el 08 de agosto del mismo año, la ciudadana ZONIA DELGADO PEREZ, cédula de identidad N° 5.643.429,

interpuso en tiempo hábil recurso de reconsideración contra la Resolución N° DCEM-R-027 de fecha 3 de julio de 1995, dictada por esta Dirección General de Control de Estados y Municipios, mediante la cual se le impuso una multa por la cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTAVOS (Bs. 22.500,00), en su condición de Directora de Obras Públicas de la Gobernación del Estado Apure, por haber incurrido en las causales de sanción previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, al no enviar la información requerida por este Organismo mediante Oficio N° DCEM-1-002-062 de fecha 26 de abril de 1995, ratificado con oficio N° DCEM-1-002-098 de fecha 22 de mayo de 1995, e igualmente por haber desatendido el apremio con apercibimiento de multa, contenido en el Oficio N° DCEM-1-002-134 de fecha 31 de mayo de 1995.

En el mencionado escrito la recurrente aduce, fundamentalmente, lo siguiente:

En primer lugar expresa que desde la fecha en que comenzó a prestar servicios en la Administración Pública ha desempeñado, durante 10 años, diferentes cargos, con abnegación, responsabilidad, honestidad y gran devoción al servicio del país.

Seguidamente expone que es cierto que el 26 de abril del año en curso, recibió el oficio emanado de la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República N° DCEM-1-002-062, al igual que la ratificación del mismo, según Oficio N° DCEM-1-002-098; delegando en ambas oportunidades la evacuación de tal información en la persona del Asesor Legal de la Dirección bajo su responsabilidad; al respecto y como prueba de lo expuesto anexa copia del memorándum contentivo de dicha delegación. Asimismo señala que cuando recibió el apercibimiento de multa signado con el N° DCEM-1-002-134, evidenció que no se le había dado curso a lo ordenado por ella y procedió a amonestar a su asesor. Que al respecto fue un poco descuidada pero que en ningún momento hubo mala fe ni omisión intencional.

Finalmente, la impugnante se refiere a los artículos 94 y 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para señalar que no ha entrabado o impedido el ejercicio de las funciones de la Contraloría.

Visto lo expuesto en el recurso y el expediente del caso, este Organismo Contralor para decidir observa:

La recurrente en su escrito trata de justificar el no haber enviado la información dentro del lapso establecido por este Organismo, alegando que delegó en el Asesor Legal de la Dirección de Obras públicas, el cumplimiento de lo requerido. En tal sentido, es menester señalar que si bien es cierto que la impugnante autorizó al funcionario señalado up-supra para que suministrara la información, no es menos cierto que sólo delegó la evacuación de la que le fuera requerida mediante el Oficio N° DCEM-1-002-098 del 22-05-95, más no la del Oficio N° DCEM-1-002-134 del 31-05-95, contentivo del apremio con apercibimiento de multa. Por otra parte, es necesario enfatizar que tal delegación, no debía comportar una renuncia de sus obligaciones, pues debía verificar, con la diligencia de un buen funcionario, el cumplimiento de la orden dada. De

manera que si la recurrente evidenció el incumplimiento de la instrucción impartida, ante tal situación, y estando en el deber de dar respuesta en forma directa y personal a la solicitud de información formulada por este Organismo, lo procedente era notificar dicha circunstancia a esta Entidad Fiscalizadora Superior, dentro del plazo fijado en el oficio de apremio y no esperar a que se le impusiera una multa para alegar tal situación. Por consiguiente se desestima dicho alegato y así se declara.

Acerca de lo alegado por la recurrente, respecto al cabal cumplimiento de sus funciones durante 10 años en ejercicio de cargos públicos, esta Dirección considera que lo expuesto por la impugnante no desvirtúa la irregularidad del hecho que dió origen a la sanción. Sin embargo de haber comprobado la recurrente la circunstancia alegada, podría haber ésta operado como atenuante de dicha sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República.

En cuanto al último alegato de la recurrente, según el cual no ha impedido o entrabado el ejercicio de las funciones de control de este Organismo, es necesario señalar que, ni aún extemporáneamente la impugnante proporcionó la información que le fuera solicitada. De tal manera que con su conducta omisiva, si entrabó el desarrollo de la Inspección Fiscal que realizaba esta Dirección en la Gobernación del Estado Apure, configurándose así los supuestos legales que sirvieron de fundamento para la imposición de la multa. Por consiguiente, esta Dirección considera que los alegatos esgrimidos carecen de fuerza para modificar la sanción impuesta.

En consecuencia, quien suscribe Director General de control de Estados y Municipios, actuando por delegación del Contralor General de la República según Resolución N° DC-2-3-R-002 de fecha 18 de enero de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 35643 del 31 de enero de 1995, conforme a la atribución contenida en el numeral 8 del artículo 10 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial N° 4408 Extraordinario de fecha 1 de abril de 1992, resuelve, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, confirmar la multa que le fuera impuesta a la ciudadana ZONIA DELGADO PEREZ por la cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 22.500,00), según Resolución N° DGEN-R-027 de fecha 3 de julio de 1995.

Notifíquese a la recurrente el contenido de la presente resolución y adviértasele que contra esta decisión podrá ejercer el recurso previsto en el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de este acto, tal como lo establece el artículo 134 ejusdem.

Comuníquese y publíquese,

PEDRO LEON TORRES LOPEZ

Director General de Control de Estados y Municipios

**DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  
DIRECCION DE CONTROL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA**

Caracas, 31 OCT 1995

1850 y 1360

**RESOLUCION No. DGAC-1-4**

En escrito de fecha 12 de julio de 1994, la ciudadana **NELLY MILLAN GARCIA**, titular de la Cédula de Identidad No. 3.558.181, en su condición de Directora Estatal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el Distrito Federal, durante el lapso comprendido entre el 16-01-90 al 31-12-90, interpuso el recurso de reconsideración previsto en el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, contra la Resolución No. DGAC-017 del 21 de junio de 1993, según la cual se le impuso multa por la cantidad de CUARENTA Y UN MIL BOLIVARES CON 00/100 ( Bs. 41.000,00 ), con fundamento en los Numerales 9 y 8 del Artículo 94, por haber celebrado contratos de inspección en forma fraccionada y haber utilizado fondos públicos en finalidades distintas a las previstas, tal como fue detallado en el texto de la recurrida, en contravención a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 42 ( hoy 43 ) de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.

A los fines de lograr la revocatoria del acto sancionatorio, el recurrente alegó: "... los hechos a que se especifica la sanción mencionada fueron cometido sin la intención al dolo o enriquecimiento, sino más bien con la de colaborar con la buena marcha de los trabajos encomendados por el Ministerio". "...en cuanto al presunto fraccionamiento de contratos de inspección por un monto de Bs. 7.065.886,14, ...fueron aprobados con cargo a Proyectos diferentes: El No. 90-DF-021 por Bs. 1.799.889,44, a nombre de la Oficina Técnica R.D.S. y el No. 90-DF-076 por Bs. 1.666.889,95, a nombre del Ing<sup>o</sup> Oscar Salami Daes, con cargo a la Obra DF-06 Carretera Local 2, Tramo Catia Cantinas del Proyecto 04: "Construcción y Mejoras de Carreteras", el 90-DF-143 por Bs. 1.999.553,51, a nombre de la Oficina Técnica R.D.S. con cargo a la Obra DF-02 Autopista Caracas - La Guaira ( Viaducto No. 1 ), Proyecto 02: Autopista y el 90-DF-142 por Bs. 1.799.553,51, a nombre de Sigma Ingenieros, S.A., con cargo a la Obra: TN-2 Mantenimiento Preventivo en diferentes vías del País. Proyecto: 06 Conservación de los lapsos de ejecución de los mismos, puede colegirse lo siguiente: los dos primeros se ejecutaron en lapsos consecutivos, desde el 01-01-90 al 15-03-90 y desde el 16-02-90 al 31-12-90, por lo que no hubo solapamiento ni en los lapsos ni en la ejecución, sino cancelación de trabajos efectivamente ejecutados en los lapsos mencionados. Lo mismo puede decirse de los otros dos, con lapsos de 01-07-90 al 15-08-90 y del 16-08-90 al 30-09-90"; que "La razón para que se contratara en esta forma fue que no habían los recursos suficientes en una sola partida para contratar las obras de que se trata, que, sin embargo, por tratarse de trabajos que en ese momento debían ejecutarse ineludiblemente, como eran los que se referían a la inspección de obras que se ejecutaban en convenio con Lagoven, en la Carretera Caracas - La Guaira que, ...revestían carácter de urgencia, no podían interrumpirse con las contrataciones en cuestión, se evitó, por una parte, que se detuviera la marcha de las obras y por otra, que se ejecutaran



las mismas sin la debida supervisión por parte del Ministerio; así mismo agrega "contratación que; además, fue, propuesta en esa forma por la Dirección General Sectorial de Vialidad Terrestre cuando se le planteó la necesidad de efectuarla y, al comprobar esta última que no contaba con los recursos suficientes para hacer una sola contratación con cargo a una sola partida de un mismo proyecto"; que "...la intención no fue la evasión del Control Previo establecido en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República". "En cuanto a la contratación de personal que efectuaba labores administrativas con cargo a la partida 70 "Obras y Servicios para la Formación de Capital", en lugar de imputarla a la partida 10 "Gastos de Personal", la misma se realizó en tal forma, por considerar que las funciones que ejercía ese personal eran complementarias a la de ejecución de Obras y Servicios para la Formación de Capital; añade "lo deseable hubiera sido la contratación por la partida 10, en esa oportunidad no existían recursos en la misma, por lo que, se procedió a efectuar los compromisos a que hace referencia la resolución sancionadora con cargo a la partida 70". Finalmente solicita "la reconsideración de la sanción contenida en la resolución nombrada, en atención a la conveniencia y oportunidad de las acciones cumplidas, por lo que así la solicito y someto a su consideración".

Visto el referido escrito este Organismo para decidir se permite observar: En primer lugar, en cuanto al fraccionamiento de contratos, el recurrente entre otras razones alega: "Que los hechos a que se especifica la sanción mencionada fueron cometidos sin la intención al dolo o enriquecimiento". Al respecto es menester precisar que en materia de infracción de leyes de carácter administrativo que imponga un deber u obligación al funcionario, la responsabilidad que se genera es de tipo personal y objetiva, lo que significa que se produce por la simple transgresión del precepto legal, con prescindencia absoluta de la intención dolosa o culposa del agente infractor.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa se determinó la inobservancia del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en cuyo texto se recoge la obligación para los Despachos del Ejecutivo de someter al control previo, bajo ciertas condiciones de cuantía, los compromisos para la adquisición de bienes y servicios o la celebración de otros contratos que impliquen compromisos financieros para la República so pena de comprometer su responsabilidad. Las infracciones a disposiciones como ésta, que imponen deberes a los funcionarios, trae como consecuencia la imposición de una sanción de tipo administrativa llamada multa, la cual se aplica independientemente de haberse producido daños al Patrimonio Público.

Por otra parte, aducir que los contratos de inspección fueron aprobados con cargo a Proyectos diferentes no desvirtúa el fraccionamiento, por cuanto para su determinación el Organismo Contralor tomó en consideración otra serie de elementos y circunstancias. Ciertamente del análisis efectuado a los contratos identificados como 90-DF-021 del 19-03-90 y 90-DF-076 del 11-05-90; así como lo contratos Nos. 90-DF-143 del 01-07-90 y 90-DF-142 del 16-08-90, suscritos con las empresas OFICINA R.D.S., C.A. y SIGMA INGENIEROS, S.A., se pudo constatar que los mismos presentaban factores comunes

representados en ( Unidad de Objeto, Fin, Causa, Fecha muy próximas, etc. ), lo que facilitaba su agrupación en un solo compromiso, y en cabeza de una de las empresas, máxime que del análisis efectuado a los respectivos documentos constitutivos de las mismas, se determinó que todas estaban dedicadas a la misma actividad y pertenecían a un mismo dueño ( OSCAR SALAMI DAES ); así el procedimiento de celebrar varias contrataciones sin que mediaran razones legales para ello; sólo cobra sentido dentro del contexto del fraccionamiento, mecanismo, utilizado para evadir el control previo consagrado en el artículo 18 de la citada Ley.

Por lo demás tampoco exime su responsabilidad ampararse en la necesidad o urgencia en la ejecución de las obras; toda vez que el Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República señala: "En situaciones de emergencia, como en caso de calamidades públicas o de conflictos interior o exterior, y en otros casos análogos, cuando sea de urgente necesidad, la ejecución de determinadas obras o la adquisición de bienes y previa consulta al Contralor, no se aplicaran las disposiciones contenidas en el Artículo 18...". Es decir, la norma transcrita establece un régimen o trato especial, que permite subsanar situaciones como la alegada por el cuentadante suprimiendo el acto de control previo, siempre y cuando se solicite antes de tomar la decisión de gastar, siendo el Contralor General de la República el funcionario competente -- para tomar dicha medida, por lo que aún existiendo tal necesidad, ésta no constituye una excepción, por cuanto no se cumplieron los extremos legales exigidos en la disposición en comento.

Finalmente, cabe observar que como quiera que en el escrito presentado por el recurrente, aún se dice para desvirtuar la utilización de fondos en finalidades distintas a las previstas y al contrario, se admite plenamente los hechos, al manifestar que "lo deseable hubiera sido la contratación por la partida 10 Gastos de Personal", este Organismo ratifica las razones para la determinación de la infracción del Artículo 42 ( hoy 43 ) de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.

Visto que los argumentos esgrimidos por el recurrente no desvirtúan los hechos imputados, su participación y responsabilidad en los mismos ni la procedencia de la sanción impuesta; quien suscribe, Directora de Control del Sector Infraestructura, actuando por delegación del Contralor General de la República, según lo previsto en la Resolución No. DC-2-3-096 del 05 de junio de 1995, publicada en la Gaceta Oficial No. 35.732 del 14 de junio del mismo año, en concordancia con la atribución establecida en el Numeral 16 del Artículo 12 del Reglamento Interno de este Organismo Contralor de fecha 01 de abril de 1992, resuelve confirmar la Resolución No. DCMC-017 del 21 de junio de 1994, mediante la cual se saltó a la ciudadana NELLY NELLINI, ya identificada, por la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CIN COCIENTOS ( Bs. 41.000,00 ).

Notifíquese personalmente al interesado el contenido de la presente Resolución y adviértasele que contra esta decisión podrá ejercer el recurso previsto en el Artículo 121 de la Ley

# GACETA OFICIAL

## DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

DEPOSITO LEGAL p p 76-0002

AÑO CXXIII — MES V      Número 35.900  
Caracas, martes 13 de febrero de 1996

Subscripción anual: Bs. 16.000,00 - Valor de cada ejemplar diario: Bs. 70,00  
Ejemplares atñasados: 40 por ciento de recargo  
Números Extraordinarios: Bs. 200,00 cada ejemplar hasta 32 páginas  
Tarifa sujeta a Resolución de fecha 2 de marzo de 1995  
Publicada en la Gaceta Oficial N° 35.695

Esta Gaceta contiene 16 páginas. — Precio: Bs. 70,00

**IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL**  
San Lázaro a Puente Victoria No. 89  
Teléfonos: 572.03.57. — 576.12.72

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dentro de los seis (6) meses siguientes a este acto, tal como establece el Artículo 134, ejueam.

Comuníquese y Publíquese.

**YOLIA ESPINOZA DE CORDERO**  
Directora de Control del Sector Infraestructura

### CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

REPUBLICA DE VENEZUELA  
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL  
RESOLUCION N° 960207-010  
Caracas, 07 de Febrero de 1996  
185° y 136°

El Consejo Supremo Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Sufragio dicta la siguiente:

#### RESOLUCION

#### CONSIDERANDO

Que corresponde al Cuerpo definir las estructuras del Consejo Supremo Electoral de conformidad con el Artículo 43 ordinal 1° de la Ley Orgánica del Sufragio.

LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941

Art. 11.- LA GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

Art. 12.- LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo Único.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

El Director de la Imprenta Nacional y GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA advierte, que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de la Administración Pública y que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de reproducciones cuyos originales lleguen en forma defectuosa y se obligue a su publicación.  
Caracas, 12 de noviembre de 1993.

#### RESUELVE

- 1.- Se declara la reestructuración del Consejo Supremo Electoral.
- 2.- Se instruye a la Comisión Reestructuradora designada por el Cuerpo en sesión ordinaria de fecha 19-07-95, el estudio de la estructura del Consejo Supremo Electoral, con la finalidad de producir las modificaciones que le permitan un moderno y eficiente funcionamiento.
- 3.- Se instruye a la Comisión Reestructuradora sobre la preparación de un proyecto de modificación del Reglamento Interno con la finalidad de adecuarlo a la nueva estructura.

Resolución aprobada por el Cuerpo, en sesión ordinaria celebrada el día 07 de febrero de 1996.

Comuníquese y Publíquese

**ENRIQUE YESPICA**  
Presidente

**SOBELLA MEJIAS**  
Secretario General (Acc)